

Estructuras de rebelión

I

Las formas de dominación a veces enfrentan coyunturas de contestación colectiva a través de formas de movilización que desbordan las instituciones y los espacios políticos reconocidos en la normalidad de las relaciones de poder que articulan al estado. Las rebeliones son procesos de movilización política que instauran una crisis política estatal en tanto cancelan de manera general o parcial la autoridad de las leyes y el gobierno, a partir de una fuerza resistente que a veces se proyecta como base de otra forma de gobierno y de sistema de autoridades.

Este breve texto argumenta que las rebeliones que se han dado en el país, en particular las contemporáneas, se han producido y desplegado a partir de una composición de estructuras sociales y políticas que en momentos críticos pasan de ser organizadoras de la vida social —y en este sentido también del orden político, por lo menos parcialmente— a conformar momentos y fuerzas de fusión que las articulan como parte de los procesos de desorganización temporal del mismo orden político. Las cosas se complican más en sociedades con un pasado de colonización.

Las rebeliones son una articulación especial de estructuras de acción y pensamiento en coyunturas más o menos largas en las que las prácticas de la participación política, además de ser activadas por las estructuras preexistentes, producen variaciones y novedades. Ya que la crisis política así instaurada genera un tiempo de fluidez en el que las variaciones y desórdenes que la imaginación y la experiencia cotidiana producen, pueden adquirir en esos momentos la forma de una fuerza de acción y prefigurar las formas sustitutas de la vida política y social.

Las rebeliones son coyunturas o tiempos de aceleración y condensación del tiempo político, y en este sentido, de incertidumbre y cambio social, de novedad en la historia. La hipótesis que desarrollo argumenta que en esos momentos de fluidez de lo social y lo político, de lo político

cambiando la forma de lo social, operan algunos soportes históricos que llamaré estructuras de rebelión.

A modo de esquema sugiero que las estructuras de rebelión son una articulación de las siguientes dimensiones: forma de organización; una historia común más o menos compartida en tanto experiencia de hechos y sentidos; una memoria; un proceso de acumulación histórica; proyectos políticos; la constitución de identidades y sujetos políticos; todo esto en relación con un horizonte de clivajes sociales y políticos o de lo que podemos llamar una estructura de conflicto.

Explico brevemente lo que considero relevante o contenido en cada uno de estos aspectos. Comienzo por lo último, que sirve para nombrar la articulación del contexto de las crisis en las que se dan las rebeliones. La estructura del conflicto (que presento de manera adecuada a la historia boliviana, puede complejizarse en una visión más comparada) contiene una línea de clivajes o divisiones sociales y políticas que organizan las relaciones de explotación y desigualdad, por un lado, y las relaciones de dominación y opresión, por el otro, de manera complementaria.

Se puede decir que a un conjunto de estructuras sociales caracterizadas por la organización de la desigualdad, la exclusión y la explotación corresponde una estructura de conflicto más o menos compleja que se levanta como un segundo piso político a partir de las contestaciones y resistencias, y las formas de problematización y disputa de las relaciones de poder existentes. Esta estructura de conflicto depende de la cantidad y gravedad de los clivajes que se vuelven motivo de lucha de clases, de lucha política.

La estructura de conflicto en el país es compleja. Contiene un nivel en el que se despliegan las relaciones de dominación instauradas por la colonización o la dimensión colonial, que ha ido cambiando de formas pero persiste. Hay un nivel de relaciones de explotación o de clivajes clasistas. Hay un nivel de clivajes políticos diversos, que van desde la relación gobernantes-gobernados (que se organiza de diversos modos según las épocas) que hoy está organizada a través del sistema de partidos y pasa por los conflictos interregionales para terminar en el tipo de polarización y distancia ideológica entre las fuerzas políticamente organizadas, las clases y los grupos.

Hay modos en que las primeras dimensiones aparecen en la organización de los clivajes políticos, aunque cabe decir que a fin de cuentas todos son clivajes político-sociales.

Las luchas sociales y políticas dependen de cómo se organiza la estructura de conflicto del país en diversos momentos históricos, es decir, de cómo se jerarquizan las estructuras de dominación y se articulan los conflictos en términos de prioridad en cada fase y coyuntura.

En la dimensión de formas de organización, cabe considerar la forma política general del país, esto es, la organización de las relaciones entre gobernantes y gobernados a través de un régimen político, un conjunto de derechos de inclusión y exclusión; el sistema de instituciones que organiza los espacios públicos y las normas de participación. Es en relación con la dinámica de esta forma que se dan las rebeliones. Lo importante son las formas de organización que dentro de la forma política general generan espacios de participación que en coyunturas críticas se vuelven espacios de resistencia y contestación de las relaciones de explotación y opresión.

El caso de las rebeliones indígenas es otra forma política general: es la comunidad, con su sistema de relaciones sociales y su estructura de autoridades, la que se mueve contra la forma política dominante que ha subsumido de manera colonial la vida política de los pueblos dominados. Se trata de otra sociedad que se mueve contra la forma política dominante. En estos casos se trata de una relación anti-colonial.

A partir del trabajo de Sinclair Thomson¹, se puede ver que algunos ciclos de rebeliones indígenas son causados y preparados por una dinámica interna a los espacios de comunidades en que se va gestando descontento contra las propias autoridades que sirven de mediación con el poder colonial y republicano, producto del abuso cometido por ellas. Se despliega una doble lógica igualitaria. Una respecto a las relaciones de poder en el seno de las comunidades y la cultura dominada, que cuestiona el desempeño de sus autoridades, y otra en relación con

1. Thomson, Sinclair: *We Alone, Will Rule. Andean Politics in an Age of Insurgency*, Wisconsin University Press, 2003; *Cuando sólo reinasen los indios, La política aymara en la era de la insurgencia*. Muela del Diablo, 2006.

el estado boliviano, que por un lado les exige tributo y por el otro les niega ciudadanía política.

En las rebeliones hay una fuerte carga de cuestionamiento y sustitución de autoridades, propias y ajenas.

Esta dimensión anticolonial de las rebeliones comunitarias aymara-quechuas aparece de manera combinada en coyunturas de rebelión de lo que se puede llamar nacional-popular.

Por lo general, en las rebeliones contemporáneas en Bolivia se despliega una combinación de las identidades indígenas con lo nacional-popular. Ésta es resultado de momentos y procesos de fusión entre varios núcleos clasistas de trabajadores urbanos y agrarios, a veces con sectores medios. El horizonte de identificación en torno al cual se establecen las equivalencias y los sentimientos de pertenencia y de derechos políticos es la nación.

Esto funciona con más fuerza en el caso de los grupos y clases que ya son resultado de algún grado de modernización, es decir, de separación de formas de organización comunitaria y de una cultura agraria, lo que hace que ahora carezcan estructuras sociales y políticas alternativas a las instituciones de la cultura dominante frente a la opresión y como recurso de movilización.

La movilización de estos sectores se realiza a partir de núcleos modernos de resistencia. El principal es el sindicato y las redes que se articulan a nivel regional y nacional entre sectores de trabajadores. Los sindicatos han sido y son la principal forma de resistencia a la explotación y la dominación en el campo de lo popular. Durante una buena parte del siglo XX, de los años cuarenta en adelante, con momentos de mayor fuerza y éxito, también han sido núcleos y redes de articulación de lo nacional en los procesos de organización de parte de la sociedad civil, en el ámbito del mundo del trabajo y sectores medios.

Hay que considerar el carácter de la autoridad y el lugar de las autoridades en las formas políticas de organización y vida política de las comunidades, por un lado, y de los sindicatos, los partidos y el estado, por el otro. En las comunidades la autoridad es una responsabilidad rotativa. Se podría pensar las rebeliones como una forma de rotación de facto de las autoridades que establecen las mediaciones entre comuni-

dad y estado, y de las del estado también, en el horizonte de sustitución-restauración de la forma política global.

Lo que está en juego en las rebeliones es un sistema de autoridades que se vive como impuesto, arbitrario e injusto, y la demanda y proyecto de sustituirlo por uno que emane de sí mismo. En esto hay formas políticas que en ciertos momentos son propicias para funcionar como estructuras de rebelión. En el caso de las comunidades, es toda una sociedad o un conjunto de estructuras sociales que se mueve contra lo que se considera un poder y una autoridad externa e ilegítima. En algunos casos este movimiento renueva las autoridades dentro de las mismas comunidades.

En el caso de los sindicatos, se trata de organizaciones deliberativas en su núcleo y con representación hacia el resto del país, en particular en relación con el estado. Los sindicatos tienen un espacio público: la asamblea, que instituye un grado amplio de fluidez en la vida política de estas organizaciones, tanto para la remoción de sus propias autoridades o representantes como para enfrentar al gobierno y al estado. En la historia de los sindicatos se combina un núcleo asambleísta de deliberación, que es el principio de organización hacia adentro, con la huelga como modo de lucha y con la insurrección cuando se pasa del conflicto parcial sobre salarios y condiciones de trabajo al conflicto general sobre la forma y los sujetos del poder estatal.

Con esto quiero pasar a la dimensión clave, la de la historia común, los hechos compartidos, los sentidos compartidos, la memoria y los proyectos que se van desarrollando y reproduciendo a través de una acumulación histórica, configurando estructuras de rebelión. La memoria y el proyecto político en particular se vuelven estructuras de rebelión. Cabe tomar en cuenta que la memoria y el proyecto existen en plural, en varias versiones, pero como parte de un horizonte común que produce la identificación, que es referente de interpretación de sentido y causa de los hechos.

La configuración de la memoria va muy ligada a la identificación, en particular en el caso de lo nacional-popular, así como en el seno de las comunidades, aunque las identidades sean otras y su relación con lo nacional-popular sea a veces problemática, a veces cercana e íntima.

La memoria es como el fondo histórico vuelto subjetividad íntima e intersubjetividad compartida. La memoria se vuelve estructura de rebelión sobre todo cuando contiene elementos de autonomía y libertad colectiva como ejes articuladores que permiten vincular la presencia selectiva del pasado con un horizonte de acción.

Entre la memoria y el proyecto está la cultura en tanto valores, principios y fines que, por un lado, seleccionan en la complejidad de los hechos aquello significativo para la comunidad o la colectividad, de tal modo que son los núcleos de producción de sentido de lo vivido y de lo que se vislumbra como posible y deseable. Nociones de justicia, derechos, soberanía, nación, comunidad, dignidad pueden operar como organización de la relación memoria-proyecto.

Es clave el modo en que se articulan memoria y proyecto. Un proyecto sin memoria no jala fuerzas del mismo modo y con la misma intensidad que cuando lo tiene. En este sentido, por ejemplo, en el seno de lo nacional-popular es clave la memoria de la insurrección y el cogobierno, y la de las rebeliones de Katari y Amaru en el seno de las comunidades. El proyecto contiene, por lo general, la forma del autogobierno, el que se recuerda y actualiza y el que se inventa.

II

En la historia de Bolivia hay básicamente dos tipos de rebeliones: indígenas y obreras, que se vuelven nacional-populares con un núcleo obrero en principio. Hay varios ciclos de rebeliones en la zona andina y otros en la zona del oriente, la Amazonía y el Chaco. Las rebeliones indígenas se han dado por siglos de manera separada. Durante el periodo colonial las rebeliones son básicamente indígenas. En los procesos de la Guerra de Independencia se vive la experiencia de las republiquetas, que serían las primeras formas autónomas de lo nacional-popular. En el siglo XX se dan las formas de articulación de lo comunitario indígena con lo nacional-popular y la tendencia a componerse o combinarse. Por cuestiones de tiempo, me concentro en comentar y analizar la veta de desarrollo de lo nacional-popular y su relación de composición con lo comunitario rebelde.

Me centro en tres momentos: la revolución del 52, noviembre de 1979 y el ciclo que comienza en abril de 2000, para luego plantear dos hipótesis sobre los ciclos y la dinámica de cambio de estas estructuras de rebelión.

La revolución del 52 es un proceso compuesto de varios procesos de acumulación política e histórica que se fusionaron para producir las crisis del estado y la reorganización del país. El 52 fue un resultado de la composición de un golpe de estado preparado por el MNR y una insurrección obrera y popular, seguida de movilización campesina en algunas zonas en las que se tomaron tierras y haciendas.

Una línea de acumulación histórica es la del MNR, que tenía una década desde su fundación y había ganado las elecciones de 1950, cuyos resultados fueron escamoteados por un gobierno impuesto. Aquí cabe resaltar que el método de las capas medias para participar en la disputa por el poder político fue la organización en partido, las elecciones y el golpe de estado el 52, en combinación con la policía. El MNR articuló a su favor la acumulación política que empezaron a gestar los socialistas desde inicios de siglo, en particular el programa de Marof²: tierras al pueblo y minas al estado.

Otra línea de acumulación histórica es la del movimiento obrero, que viene también desde inicios de siglo. Desde la década de los cuarenta entra en una etapa de maduración y extensión que le permite enfrentar cada vez más el despotismo del capital minero. Aquí cabe señalar que la forma primordial de organización de la clase obrera es el sindicato y su articulación sectorial y nacional, y de forma secundaria, los partidos políticos. En lo que concierne a su forma de lucha, se trata de un proceso que parte de la organización interna en torno a la asamblea del sindicato, pasa a la huelga y de ella a la insurrección armada.

La articulación de estas dos líneas de acumulación histórica causó la rebelión del 52, produciendo la coyuntura de crisis y refundación del estado en Bolivia. Se podría decir que en la forma obrera de rebeldía está incorporada la forma comunitaria de rebelión, combinada ya con la disciplina sindical y el discurso nacionalista y socialista.

2. Marof, Tristán: *La justicia del inca*. 1921.

Como proyecto, el núcleo articulador es la nación, no la comunidad. Hay una finalidad moderna. Se trata de organizar la soberanía del estado nacional. En torno a ello confluyen las formas de rebelión de los sectores populares urbanos y la de los obreros, así como parte de las capas medias.

Las estructuras de rebelión fueron la forma política comunidad en algunas zonas y la forma política sindicato. Éstas reaparecen como los principales núcleos de las estructuras de rebelión a fines de los setenta y desde el año 2000. La comunidad tiene un peso o presencia cada vez más fuerte. En el 52 no fue extensiva ni central. En torno a estas dos formas se fue ampliando el espectro de organizaciones que componen las estructuras de rebelión.

La estructura del conflicto fue articulada por estos procesos de acumulación histórica. Por un lado, la articulación del discurso nacionalista revolucionario en la década de los cuarenta configura el horizonte moral e intelectual del proyecto político. El clivaje que el MNR establece es el de la contradicción entre nación y antinación, en torno al cual se articulan los bloques sociales y políticos, en particular el bloque rebelde antioligárquico. El proceso de formación de la clase obrera y su organización sindical articula el otro clivaje, el clasista, que opera el 52 de manera secundaria pero con fuerza.

En el discurso del nacionalismo no estaba planteado el clivaje entre propiedad terrateniente y servidumbre; en algunos otros discursos socialistas sí, como en el de Marof, que, como mencionamos, propone el programa de la época: minas al estado y tierras al pueblo. Esta contradicción sí estaba planteada por una serie de rebeliones indígenas que tuvieron su momento más alto a fines del siglo XIX con el cerco de La Paz. Luego continúa en otra serie de rebeliones alrededor de Chayanta en la década de los veinte³, en los procesos de articulación del proyecto de la república del Tahuantinsuyu planteada por Nina en las primeras décadas del siglo XX, como parte de un movimiento más amplio de organización de los caciques apoderados de las comunidades en la demanda por sus tierras.

3. Cfr. Hylton, Forrest: "Tierra común: caciques artesanos e intelectuales radicales y la rebelión de Chayanta" en *Ya es otro tiempo el presente. Cuatro momentos de insurgencia indígena*, Muela del Diablo, La Paz, 2003.

De los varios clivajes existentes en el país el 52, el conflicto se concentra en torno al par de contradicciones nacional y clasista, que organizan a los bloques sociales en pugna y también el horizonte del proyecto y las reformas del estado.

La forma partido, que fue importante el 52, ha ido perdiendo peso en las formas de rebeldía y se ha ido adaptando por lo general a la reproducción y gestión de las estructuras de gobierno existentes. En las décadas de los setenta y los ochenta los partidos han tenido un papel muy secundario y después de la asamblea popular, a inicios de los setenta. Se podría decir que los partidos ya no forman parte de las estructuras de rebelión, aunque sí de las de resistencia durante los setenta y ochenta. Durante los noventa y hasta hoy los partidos no participan para nada de las estructuras de rebelión. Son más bien parte de las estructuras contra las cuales hay rebelión.

Hay que tomar en cuenta los componentes del proyecto de la rebelión del 52 y algunos de sus resultados más significativos. El primero es la nacionalización o la soberanía estatal sobre los recursos naturales, y a través de esto, la industrialización y la soberanía económica del país. Lo menciono porque hoy reaparece como centro del proyecto nacional-popular.

Uno de los resultados de la rebelión es el cogobierno. Esta experiencia queda como parte del proyecto político. Las reformas, la rebelión y/o la revolución por hacer deben incorporar como mínimo alguna forma de cogobierno con los trabajadores obreros y campesinos.

La reforma agraria no ha generado núcleos o estructuras de rebelión sino más bien núcleos de sustento, más o menos conservadores, del nuevo estado. Se puede ver, por el contrario, que allí donde la reforma agraria no ha desorganizado la forma comunitaria, a pesar de la introducción de la pequeña propiedad, todavía se siguen activando núcleos de rebelión.

El otro momento importante de rebelión es la resistencia al golpe militar de Natush Busch en noviembre de 1979. Aquí reconstruyo el argumento de René Zavaleta⁴. En noviembre del 79 se habría ampliado

4. Zavaleta, René: *Las masas en noviembre*, Juventud, La Paz, 1983.

el universo humano o el sujeto y la forma de lo nacional-popular, a partir de la confluencia en torno a una convocatoria obrera realizada por la COB contra el golpe militar. En torno a la centralidad proletaria confluieron campesinos con sus propias formas de lucha, en particular el bloqueo organizado por sus sindicatos, y también otros sectores urbanos populares.

A esta fusión Zavaleta la llamó masa, que es una forma de lo nacional-popular que articula comunidades que aparecen políticamente en lo nacional como sindicatos agrarios, los sindicatos obreros y las formas gremiales de organización de los sectores populares urbanos y estudiantes.

La masa, en este sentido, es una forma y estructura de rebelión. Cuando lo que aquí se está considerando como estructuras de rebelión se articula y fusiona en un movimiento antigubernamental y antiestatal, configura lo que Zavaleta llamó la masa, que no es algo informe sino más bien una forma rebelde que se articuló a partir de varios núcleos organizativos, en la que se produce, reproduce y desarrolla la identidad nacional-popular. En la coyuntura del 79 la rebelión, que fue vencida, tenía como programa la democracia, no precisamente la versión liberal de la democracia, sino su versión nacional-popular. Esta implica la combinación de derechos políticos para todos, el cogobierno como forma práctica del principio de igualdad política y, nuevamente, la renacionalización de la economía.

Aprovechando la reflexión de Zavaleta, me animo a decir que la masa es la forma que adopta toda rebelión en sus modalidades nacional-popular y comunitaria. Se trata de gente actuando más allá de la sociedad civil y la comunidad, aunque a partir de ellas, en un grado de fusión política que hace que no sólo sean obreros, campesinos o alguna otra identidad sectorial, sino parte del pueblo rebelde.

Uno de los rasgos de las rebeliones es precisamente la suspensión/sustitución y cuestionamiento de las jerarquías previas, de las separaciones entre gobernantes-gobernados, de las mediaciones y los sistemas de autoridades. El momento de fluidez y crítica que instauran las rebeliones produce, a su vez, la forma de fusión política que podemos bien llamar masa. Esto se puede mostrar y argumentar en el contemporáneo ciclo de rebelión en el país.

En 1979 la estructura del conflicto está configurada de manera central por el clivaje político dictadura-democracia, que tenía como soportes sociales a sindicatos obreros —que son los que empujan la transición a través de un proceso de rearticulación nacional y de articulación de otros sectores populares en torno a su movimiento— por un lado, y al ejército y la confederación de empresarios —que son los que instauraron y sustentaron la dictadura, con apoyo de los gobiernos militares de la región y de EE UU— por el otro.

En tanto el sujeto obrero es la base de articulación de la demanda de democratización del país, la estructura del conflicto también está compuesta por el clivaje clasista, que es la base social en movimiento, que opera o instituye la centralidad del clivaje político a favor de la democratización.

En estos años y coyuntura se empieza a desplegar ya el katarismo como movimiento político aymara que organiza el nuevo sindicalismo y sus partidos políticos, el MITKA y el MRTK, que logran tener representación en el parlamento durante el proceso de transición política. Esta emergencia plantea que el clivaje étnico-cultural forma parte de la estructura de conflicto, y aquel es introducido en el sistema de partidos.

El siguiente ciclo de rebeliones comienza en abril de 2000 con la guerra del agua y la constitución de la Coordinadora. Un primer rasgo que vale la pena resaltar es que se trata de un movimiento victorioso. Cabe recordar también que en la historia del país sólo algunas rebeliones nacional-populares han sido exitosas; no así las rebeliones indígenas, que han sido derrotadas militarmente después de largos cercos.

Un rasgo de las rebeliones victoriosas —abril de 2000 y octubre de 2003— es que no se habían propuesto una revolución o un cambio global del poder político y el orden social. Tenían fines parciales, limitados, reformas dentro del estado existente: la cancelación de leyes y de la política económica; la última, la cabeza del presidente. A partir de demandas y fines limitados y parciales se fueron planteando, sin embargo, cuestiones globales, como el cambio de modelo económico y la constituyente, en la veta nacional-popular, y en cierto momento de septiembre de 2001, la autonomía aymara.

En primer lugar, la coyuntura de la guerra del agua fue una revuelta urbana en torno a la cual fueron confluendo los sindicatos agrarios y los comités de regantes, sobre todo. Fue resultado de la movilización de algunas estructuras de organización que activaron la revuelta. Se trató de una composición de comités de regantes, sindicatos agrarios, la federación de fabriles y algunos grupos cívicos regionales de manera secundaria, pero la clave fue la constitución de su forma de articulación general: la Coordinadora, que es un resultado de la rebelión. La Coordinadora se vuelve la principal estructura de la rebelión.

Desde la guerra del agua se ha incorporado la forma de la Coordinadora como un rasgo que tiende a aparecer y organizarse en las coyunturas de movilización general y crisis política. Desde entonces va madurando la idea de una coordinadora de los movimientos sociales, en lo que hay avances y retrocesos. Aparece y desaparece, pero ya forma parte del horizonte de organización y acción popular.

La Coordinadora se hizo necesaria para la articulación y la representación de una diversidad y pluralidad de organizaciones, fuerzas y opiniones. Responde, a la vez, a la condición de fragmentación inducida por la economía y la política neoliberal, pero también a la diversificación y el desarrollo de la sociedad civil.

En la coyuntura de la guerra del agua se actualiza la memoria del 52 y la del 79 como revuelta que confluye hacia la ciudad en la que se enfrenta al ejército con la policía, y a través de ellos, al gobierno. Se actualiza también el proyecto de nacionalización o renacionalización en este caso, primero del agua y luego de la economía del país.

De la coyuntura misma de la guerra del agua sale la consigna de la constituyente. Desde entonces se liga el programa de nacionalización y democratización o reforma del estado con presencia de los trabajadores. El eje del proyecto es nacionalización y democracia. Se trata de la actualización de la memoria y proyecto nacional-popular, pero con desarrollo y cambios.

Del agua se ha pasado a la tierra, en lo que cabe distinguir tres vetas de movilización: la de los pueblos del oriente, la Amazonía y el Chaco, que tuvo un ciclo de movilizaciones que se acompaña de un conjunto de reformas que incluye el reconocimiento de las tierras comuni-

tarias de origen. Esta veta no ha experimentado rebeliones, sino un proceso de movilizaciones reformista que ha sido exitoso en el mediano plazo.

La otra veta es la del Movimiento Sin Tierra, que combina algo de la experiencia brasileña con la memoria del 52 y un poco de política comunitaria. La tercera veta, la más fuerte y conflictiva, es la de las comunidades y sindicatos aymaras y quechuas en el Altiplano, que tuvo su momento más fuerte en septiembre de 2001. Aquí la principal estructura de rebelión es la comunidad misma, es decir, la forma general de otra sociedad o sistema de relaciones sociales que se mueve contra el gobierno y el estado. Esto implica que se actualiza no sólo el problema irresuelto de la reforma agraria, sino también el del autogobierno de las comunidades, aunque el conflicto se articule en relación con el estado, como demanda de tractores, inversión, cambio de la Ley INRA o régimen jurídico de la propiedad de la tierra.

Uno de los rasgos de octubre fue un rápido desplazamiento de los núcleos de conflicto y movilización, a la vez que la proliferación y activación de varios núcleos de resistencia, movilización y acción política. Empezó en el altiplano con demandas parciales y locales, a las que se sumaron las movilizaciones contra la venta del gas por Chile y por un cambio en la Ley de Hidrocarburos que recupere el gas bajo control nacional. A esto se articula el proceso de movilización de El Alto por sus demandas locales, universidad e impuestos.

La represión produjo una veloz articulación de varias temporalidades o ciclos de movilización, algunos de rebelión política.

Mi hipótesis es que están desplegándose por lo menos dos ciclos de rebelión en la historia reciente del país. Por un lado, se ha iniciado un ciclo de movilización y rebeldía aymara-quechua o comunitaria, con sus extensiones en las ciudades andinas, en particular en El Alto. Esto se viene gestando desde hace tiempo, desde la década de los setenta, pero aparece recién produciendo crisis desde el año 2000 en la arena política nacional. Se ha pasado de la acumulación interna, y en el seno de la política nacional a través de formas y fases reformistas, a la de la rebelión. Considero que estamos en los inicios de un ciclo más o menos largo de rebelión comunitaria.

Hay que tener en cuenta que las coyunturas fuertes de las rebeliones indígenas anteriores no son hechos aislados en el tiempo, sino resultado de la acumulación histórica de varias décadas. En este sentido, es pertinente la noción de ciclos de rebelión.

Hay otro ciclo de rebeliones que ha comenzado a desplegar el campo de lo nacional-popular desde la guerra del agua en abril de 2000. A veces lo nacional-popular penetra lo comunitario aymara-quechua, a veces esto penetra y se compone con lo nacional-popular.

Se está ampliando el espectro de las formas organizativas que operan como estructuras de rebelión. En abril de 2000 aparecieron los comités de regantes y la Coordinadora. En octubre de 2003, las juntas vecinales se vuelven por primera vez estructuras de rebelión. La diferencia entre abril de 2000 y octubre de 2003 es que en 2003 no hay coordinación general, sino la confluencia espontánea en una movilización que tenía cada vez más carácter nacional. Uno de los rasgos de octubre es que fue una convergencia contra la tiranía del gobierno, contra la venta del gas y por su nacionalización, y por las reivindicaciones particulares de cada sector: una combinación de lo general y lo específico.

La estructura de los conflictos que se despliegan los últimos años está compuesta y tensionada por el clivaje clasista —que hoy se mueve en torno a la contradicción privatización-renacionalización—. La lucha de clases se despliega en torno a núcleos macro, una vez que las reformas desreguladoras del trabajo y el capital trataron de desorganizarla e invisibilizarla al nivel micro de los lugares de trabajo y producción. La disputa por el excedente no está tanto al nivel del salario, sino al del control de los recursos naturales y las posibilidades de su redistribución en producción y reproducción social. La estructura de conflicto también está compuesta por el clivaje planteado por las organizaciones aymaras y quechuas, por un lado, y las organizaciones de los pueblos de las tierras bajas, la Amazonía y el Chaco, por el otro. En los últimos hay una apuesta estratégica por la vía de las reformas inclusivas en el seno del estado boliviano. En el ámbito aymara y quechua se combinan las prácticas y perspectivas de reforma con los momentos de rebelión.

III

Hay dos ciclos de rebeliones que están desplegándose de manera paralela, combinándose, interpenetrándose, separándose también, en coyunturas de crisis general, pero también en el tiempo de acumulación histórica, sobre todo porque lo indio ya no es exclusivamente rural sino también urbano. Esta condición tiende a imbricarlo con lo nacional-popular, además de la historia o memoria de la revolución nacional del 52.

En cada nueva coyuntura de rebelión no se repite el mismo patrón de composición y movilización, en lo social y en lo político. Hay un proceso de mutación en las formas de acción y organización, pero sobre todo en las formas de fusión o de la masa que se configura en los momentos de rebelión.

Se trata, sin embargo, de formas y momentos de rebelión que están actualizando la memoria de organización y proyecto contenida en la historia de lo nacional-popular y lo comunitario en el país.

Cada una de las coyunturas de crisis del año 2000 en adelante ha tenido de una composición diferente en lo que concierne a la articulación de las estructuras de rebelión y de los grupos sociales, así como — en lo que se refiere a las formas de identificación, al proyecto político— la forma de fusión, aunque reaparezcan de manera recurrente algunos métodos y formas de acción, como el bloqueo, la marcha, la huelga. Ahora se están dando de manera simultánea, con resultados generales mutantes en términos de la forma de la masa.

La forma de la masa, que es la forma del sujeto compuesto de la rebelión, está mutando. Lo nacional-popular ha vuelto a adquirir la forma de la masa. A la vez que actualiza su memoria histórica, está mutando rápidamente. Lo nacional-popular está en fluidez y se está masificando con más frecuencia. Se trata de una masa rebelde que tiene un proyecto de nacionalización y la reconstitución de la democracia como cogobierno entre trabajadores.

En la última coyuntura de crisis estatal, desplegada en mayo y junio de 2005, se ha experimentado una nueva forma y secuencia de fusión y articulaciones aleatorias. Las movilizaciones empezaron con

marchas organizadas por el MAS, el partido campesino de proyecto nacional. Simultáneamente comenzaron marchas de los sindicatos campesinos, luego de los mineros. Paralelamente, las juntas vecinales de la ciudad de El Alto comenzaron también las marchas y los bloqueos. Las fuerzas circulan, empiezan en Cochabamba hacia La Paz, hacia donde se mueven también las movilizaciones del resto del país en este primer momento.

Lo peculiar de las movilizaciones es que si bien varias fuerzas están en movimiento y atraviesan la ciudad de La Paz casi cada día, no se fusionan, a no ser en los momentos de la lucha callejera. La convergencia se da en torno al programa del momento: nacionalización y asamblea constituyente. Una vez que el congreso decide irse a sesionar a Sucre, nuevas fuerzas se mueven hacia la capital del país: mineros y campesinos que, junto a los estudiantes, cercan nuevamente a los parlamentarios y evitan la sucesión presidencial que implicaba el paso a la fase autoritaria y altamente represiva del estado boliviano.

En esta coyuntura se vio que los elementos de programa nacional se sobreponen a los de carácter indio o indígena. Las fuerzas campesinas y comunarias también defienden la continuidad, pero reformada, de las instituciones de aquello que todavía se llama democracia. Todas las estructuras de organización popular se han activado para evitar la vuelta de los partidos al gobierno, pero están actuando cada una por su lado y con mandos autónomos, que se articulan difícilmente a no ser en los momentos de intensidad del enfrentamiento político y militar.

El horizonte político del presente siglo está configurado por las rebeliones nacional-populares y comunitarias que bloquean la recomposición del dominio neoliberal en el país, aunque todavía no han logrado sustituirlo. De manera paralela, se ha incorporado en ese horizonte la victoria electoral del partido campesino que contiene el voto nacional-popular y comunitario, posibilidad alimentada básicamente por las rebeliones. Estamos en el horizonte de una victoria electoral cuya condición histórica de posibilidad es el ciclo de rebeliones, y la defensa de la misma pasa por la latencia de otras rebeliones. Los cambios políticos en el país se están alimentando de esta relación entre rebeliones y política electoral.